

El Estado neoliberal

El papel del Estado en la teoría neoliberal es bastante fácil de definir. Sin embargo, la práctica de la neoliberalización ha evolucionado de tal modo que se ha alejado de manera significativa de la plantilla prescrita por esta teoría. Por otro lado, la evolución hasta cierto punto caótica y el desarrollo geográfico desigual de las instituciones, los poderes y las funciones estatales experimentado durante los últimos treinta años sugiere que el Estado neoliberal pueda ser una forma política inestable y contradictoria.

El Estado neoliberal en teoría

De acuerdo con la teoría, el Estado neoliberal debería favorecer unos fuertes derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley, y las instituciones del libre mercado y del libre comercio^[86]. Éstos son los puntos de acuerdo considerados esenciales para garantizar las libertades individuales. El marco legal viene definido por obligaciones contractuales libremente negociadas entre sujetos jurídicos en el mercado. La inviolabilidad de los contratos y el derecho individual a la libertad de acción, de expresión y de elección deben ser protegidos. El Estado, pues, utiliza su monopolio de los medios de ejercicio de la violencia, para preservar estas libertades por encima de todo. Por ende, la libertad de los empresarios y de las corporaciones (contempladas por el sistema jurídico como personas) para operar dentro de este marco institucional de mercados libres y de libre comercio, es considerada un bien fundamental. La empresa privada y la iniciativa empresarial son tratadas como las llaves de la innovación y de la creación de riqueza. Los derechos de propiedad intelectual son protegidos (por ejemplo, a través de las patentes) de tal modo que sirvan para estimular cambios tecnológicos. Los incrementos incesantes de la productividad deberían, pues, conferir niveles de vida más elevados para todo el mundo. Bajo la premisa de que «una ola fuerte eleva a todos los barcos», o la del «goteo o chorreo», la teoría neoliberal sostiene que el mejor modo de asegurar la eliminación de la pobreza (tanto a escala doméstica como mundial) es a través de los mercados libres y del libre comercio.

Los defensores de la teoría neoliberal son particularmente constantes en la búsqueda de la privatización de activos. La ausencia de claros derechos de propiedad privada —como ocurre en muchos países en vías de desarrollo— es considerada una de las mayores barreras institucionales al desarrollo económico y a la mejora del bienestar humano. La delimitación y la asignación de derechos de propiedad privada son, a su modo de ver, el mejor modo de protegerse contra la denominada «tragedia

de los bienes comunes» (la tendencia de los individuos a superexplotar de manera irresponsable los recursos de propiedad común, como la tierra y el agua). Los sectores económicos anteriormente dirigidos o regulados por el Estado deben ser traspasados a la esfera privada y desregulados (liberados de toda forma de interferencia estatal). La competencia —entre los individuos, las empresas, y entre entidades territoriales (ciudades, regiones, naciones y agrupamientos regionales)— es considerada una virtud esencial. Por supuesto, las directrices de la competencia en el mercado deben ser correctamente observadas. En aquellas situaciones en que estas directrices no se hallen establecidas claramente o en que los derechos de propiedad privada sean difíciles de definir, el Estado debe utilizar su poder para imponer o inventar sistemas de mercado (tales como comerciar con los derechos de contaminación). Los defensores del neoliberalismo afirman que la privatización y la desregulación, junto a la competencia, eliminan los trámites burocráticos, incrementan la eficiencia y la productividad, mejoran la calidad de las mercancías y reducen los costes, tanto de manera directa para el consumidor a través de la oferta de bienes y servicios más baratos, como indirectamente mediante la reducción de las cargas fiscales. El Estado neoliberal debería buscar de manera persistente reorganizaciones internas y nuevos pactos institucionales que mejoren su posición competitiva como entidad en relación con otros Estados en el mercado global.

Mientras la libertad personal e individual en el mercado se encuentra garantizada, cada individuo es responsable y debe responder por sus acciones y de su bienestar. Este principio se extiende a la esfera del sistema de protección social, del sistema educativo, de la atención sanitaria e incluso de las pensiones (la seguridad social ha sido privatizada en Chile y en Eslovaquia, y existen propuestas para proceder del mismo modo en Estados Unidos). El éxito o el fracaso personal son interpretados en términos de virtudes empresariales o de fallos personales (como puede ser no invertir de manera suficiente en el propio capital humano a través de la educación) en lugar de ser atribuidos a ningún tipo de cualidad sistémica (como las exclusiones de clase normalmente atribuidas al capitalismo).

La libre movilidad del capital entre sectores, regiones y países se considera un factor crucial. Todas las barreras a esta libertad de movimiento (como aranceles, ajustes fiscales punitivos, la planificación y los controles medioambientales, así como otros impedimentos localizados) han de ser eliminadas, salvo en aquellas áreas que son cruciales para los «intereses nacionales», con independencia de cómo se definan éstos. La soberanía estatal sobre la circulación de mercancías y de capitales es entregada en una actitud servicial al mercado global. La competencia internacional se percibe como algo positivo en tanto que mejora la eficiencia y la productividad, reduce los precios y, por consiguiente, controla las tendencias inflacionarias. Por lo tanto, los Estados deberían buscar de manera colectiva, y negociar entre ellos, la reducción de las barreras a la circulación del capital entre las fronteras y la apertura de los mercados (tanto para las mercancías como para capital) al intercambio global.

No obstante, la cuestión de si esto también se aplica a la fuerza de trabajo, en tanto que mercancía, resulta polémica. En tanto que todos los Estados deben colaborar para reducir las barreras al intercambio, deben surgir estructuras de coordinación como el grupo de los países del capitalismo avanzado (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá Japón) conocido como el G7 (y, actualmente, como el G8 tras la adhesión de Rusia). Los acuerdos internacionales entre los Estados que garantizan el imperio de la ley y la libertad de comercio, como los que acaban de incorporarse a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, son cruciales para el avance del proyecto neoliberal a escala global.

Los teóricos del neoliberalismo albergan, sin embargo, profundas sospechas hacia la democracia. El gobierno de la mayoría se ve como una amenaza potencial a los derechos individuales y a las libertades constitucionales. La democracia se considera un lujo, que únicamente es posible bajo condiciones de relativa prosperidad en las que también concurre una fuerte presencia de la clase media para garantizar la estabilidad política. Los neoliberales tienden, por lo tanto, a favorecer formas de gobierno dirigidas por elites y por expertos. Existe una fuerte preferencia por el ejercicio del gobierno mediante decretos dictados por el poder ejecutivo y mediante decisiones judiciales en lugar de mediante la toma de decisiones de manera democrática y en sede parlamentaria. Los neoliberales prefieren aislar determinadas instituciones clave, como el banco central, de las presiones de la democracia. Dado que la teoría neoliberal se concentra en el imperio de la ley y en la interpretación estricta de la constitucionalidad, se infiere que el conflicto y la oposición deben ser dirimidos a través de la mediación de los tribunales. Los individuos deben buscar las soluciones y los remedios de todos los problemas a través del sistema legal.

Tensiones y contradicciones

Existen algunas áreas oscuras así como también puntos de conflicto en el seno de la teoría general del Estado neoliberal. En primer lugar, está el problema de cómo interpretar el poder monopolista. La competencia a menudo acaba convertida en monopolio o en oligopolio, ya que las empresas más fuertes expulsan a las más débiles. La mayoría de los teóricos del neoliberalismo no consideran problemático este aspecto (en su opinión, debería maximizar la eficiencia) con tal de que no haya barreras sustanciales a la entrada de competidores (una condición a menudo difícil de llevar a la práctica y que el Estado debe, por lo tanto, salvaguardar). El caso de los denominados «monopolios naturales» resulta más espinoso. No tiene sentido la competencia entre múltiples redes de energía eléctrica, de sistemas de tuberías para la conducción del gas, de sistemas de suministro de agua y de tratamiento de las aguas residuales, o de líneas férreas entre Washington y Boston. En estas áreas, la regulación estatal del suministro, el acceso y la fijación de precios parece ineludible. Aunque la desregulación parcial puede ser posible (permitiendo a los productores en competencia proporcionar electricidad utilizando la misma red o conducir trenes en

las mismas vías, por ejemplo) las posibilidades de que aparezcan prácticas especulativas y abusivas, como demostró sobradamente la crisis de energía de California en 2002, o de irregularidades y de confusión extremas, como ha demostrado la situación de los ferrocarriles británicos, son muy reales.

El segundo gran ámbito de controversia es el relativo a los fallos del mercado. Éstos se producen cuando los individuos y las compañías eluden asumir la totalidad de los costes imputables a su actividad, eludiendo sus responsabilidades al no permitir que el mercado valore su incidencia mediante el sistema de precios resultante (estas responsabilidades son, en lenguaje técnico, «externalizadas»). El tema clásico para abordar este problema es la contaminación, puesto que los individuos y las compañías eluden los costes vertiendo gratis sus residuos tóxicos en el medio ambiente. Como resultado de su actuación, puede producirse la destrucción o degradación de ecosistemas productivos.

La exposición a sustancias peligrosas o a peligros físicos en los centros de trabajo puede afectar a la salud de los seres humanos e incluso reducir la reserva de trabajadores sanos que constituyen la fuerza de trabajo. Aunque los defensores del neoliberalismo admiten la existencia del problema y algunos aceptan la necesidad de una limitada intervención estatal, otros defienden la inacción porque el remedio será casi con toda seguridad peor que la enfermedad. Sin embargo, la mayoría estaría de acuerdo en que, de haber intervenciones, éstas deben operar a través de los mecanismos del mercado (mediante cargas o incentivos fiscales, la comercialización de los derechos de contaminación, y otras medidas similares). Los fallos de la competencia son tratados de una forma similar. A medida que proliferan las relaciones contractuales y la subcontratación puede incurrirse en un incremento de los costes de transacción. El gran aparato de la especulación de divisas, por tomar sólo un ejemplo, se presenta como algo cada vez más costoso a la vez que se vuelve progresivamente más fundamental para capturar beneficios especulativos. Igualmente, emergen otros problemas si, por ejemplo, todos los hospitales en mutua competencia de una misma región compran el mismo sofisticado equipo que permanece infrautilizado provocando, de este modo, un aumento de los costes agregados. En este sentido, la defensa de la contención del gasto mediante la planificación, la regulación y la coordinación vinculante por parte del Estado es contundente, pero de nuevo los neoliberales se muestran profundamente desconfiados hacia este tipo de intervenciones.

Se presume que todos los agentes que actúan en el mercado tienen acceso a la misma información. Igualmente, se presume que no existen asimetrías de poder o de información que interfieran en la capacidad de los individuos para tomar decisiones económicas racionales en su propio interés. En la práctica, raramente, si es que alguna vez, se producen situaciones que se aproximen a esta situación, y esto tiene notables consecuencias^[87]. Los jugadores mejor informados y más poderosos poseen una ventaja que pueden fácilmente explotar para conseguir todavía más información

y un mayor poder relativo. Por otro lado, el establecimiento de derechos de propiedad intelectual (las patentes) estimula el «predominio de la búsqueda de rentas». Los actores que poseen derechos sobre patentes utilizan su poder monopolista para fijar precios monopolistas y evitar la transferencia de tecnología, excepto a un coste muy elevado. Por lo tanto, con el transcurso del tiempo, las relaciones de poder asimétricas tienden a incrementarse y no a reducirse, a menos que el Estado intervenga para contrarrestarlas. La idea neoliberal de un sistema de información perfecto y de un campo de juego equilibrado para la competencia, parece o bien una utopía inocente, o bien una forma deliberada de enmarañar los procesos que conducirán a la concentración de la riqueza y, por lo tanto, a la restauración del poder de clase.

La teoría neoliberal del cambio tecnológico descansa en la fuerza coercitiva de la competencia para impulsar la búsqueda de nuevos productos, de nuevos métodos de producción y de nuevas formas organizativas. Sin embargo, este impulso pasa a integrarse de manera tan profunda en el sentido común empresarial, que se convierte en la creencia obsesiva de que existe una componenda tecnológica para todos y cada uno de los problemas que puedan plantearse. Hasta el punto de que es una idea incuestionable no sólo en el seno de las compañías sino también dentro del aparato estatal (en particular, en el ámbito militar), generando fuertes tendencias de cambio tecnológico independientes que pueden llegar a ser desestabilizadoras, cuando no contraproducentes. El desarrollo tecnológico puede descontrolarse debido a que los sectores dedicados únicamente a la innovación tecnológica crean nuevos productos y nuevas formas de hacer las cosas cuando todavía no existe mercado para ello (es decir, se producen nuevos productos farmacéuticos, para los que se inventan nuevas enfermedades). Además, empresas sagaces operando en el límite de la legalidad o directamente en la ilegalidad pueden movilizar las innovaciones tecnológicas descubiertas para socavar las relaciones y las instituciones sociales reinantes; y a través de sus actividades pueden remodelar el sentido común para obtener ventajas pecuniarias. Así pues, existe una conexión interna entre el dinamismo tecnológico, la inestabilidad, la disolución de los vínculos sociales de solidaridad, la degradación medioambiental, la desindustrialización, los cambios acelerados en las relaciones espacio-temporales, las burbujas especulativas y la tendencia general hacia la creación de crisis en el seno del capitalismo^[88].

Finalmente, hay algunos problemas políticos fundamentales dentro del neoliberalismo que necesitan ser abordados. Una contradicción es la que emerge entre un atractivo individualismo posesivo pero alienador, por un lado, y el deseo de una vida colectiva significativa, por otro. Si bien se supone que los individuos son libres para elegir, se da por sentado que no van a optar porque se desarrollen fuertes instituciones colectivas (como los sindicatos) aunque sí débiles asociaciones voluntarias (como las organizaciones benéficas). Por supuesto, no deberían escoger asociarse para crear partidos políticos con el objetivo de obligar al Estado a intervenir

en el mercado, o eliminarlo. Para protegerse frente a sus grandes miedos —el fascismo, el comunismo, el socialismo, el populismo autoritario e incluso el gobierno de la mayoría—, los neoliberales tienen que poner fuertes límites al gobierno democrático y apoyarse, en cambio, en instituciones no democráticas ni políticamente responsables (como la Reserva Federal o el FMI) para tomar decisiones determinantes. Esto crea la paradoja de una intensa intervención y gobierno por parte de elites y de «expertos» en un mundo en el que se supone que el Estado no es intervencionista. Esto recuerda el cuento utópico de Francis Bacon titulado *New Atlantis* (publicado por primera vez en 1626), en el que todas las decisiones cruciales son tomadas por un consejo de sabios ancianos. Así pues, frente a los movimientos sociales que buscan intervenciones colectivas, el Estado neoliberal se ve obligado a intervenir, en ocasiones de manera represiva, negando, por lo tanto, las mismas libertades que supuestamente defiende. Sin embargo, en esta situación puede desenfundarse un arma secreta, ya que la competencia internacional y la globalización pueden ser utilizadas para disciplinar a los movimientos de oposición a la agenda neoliberal dentro de Estados concretos. Si esto fallara, el Estado debe entonces recurrir a la persuasión, a la propaganda o, en caso necesario, a la fuerza bruta y al poder policial para suprimir la oposición al neoliberalismo. Éste era precisamente el miedo de Polanyi: que el proyecto utópico liberal (y por ende neoliberal) en última instancia sólo podía sostenerse recurriendo al autoritarismo. La libertad de las masas se restringiría para favorecer la libertad de unos pocos.

El Estado neoliberal en la práctica

La naturaleza general del Estado en la era de la neoliberalización es difícil de describir por dos razones concretas. En primer lugar, las divergencias sistemáticas con el modelo que describe la teoría neoliberal se tornan rápidamente evidentes, y no todas pueden atribuirse a las contradicciones internas ya esbozadas. En segundo lugar, la dinámica evolutiva de la neoliberalización ha sido de tal envergadura que ha llegado a forzar adaptaciones que han variado enormemente de un lugar a otro, así como también a lo largo del tiempo. Todo intento de extraer una imagen integrada de un típico Estado neoliberal a partir de esta inestable y voluble geografía histórica, podría parecer cosa de locos. No obstante, en mi opinión, resulta útil perfilar algunas líneas de argumentación generales que mantienen la vigencia del concepto de un Estado propiamente neoliberal.

Hay dos ámbitos en particular en los que el impulso para restaurar el poder de clase, tensa y en algunos aspectos llega incluso a voltear la teoría neoliberal cuando es llevada a la práctica. La primera emerge de la necesidad de crear un «clima óptimo de negocios o de inversión» para las pujas capitalistas. Aunque hay algunas condiciones, como la estabilidad política o el respeto pleno de la ley y la imparcialidad en su aplicación, que plausiblemente podrían ser consideradas «neutrales respecto a la clase», hay otras manifiestamente parciales. Esta parcialidad

emerge, en particular, del tratamiento de la fuerza de trabajo y del medioambiente como meras mercancías. En caso de conflicto, el Estado neoliberal típico tenderá a privilegiar un clima óptimo para las empresas frente a los derechos colectivos (y la calidad de vida) de la fuerza de trabajo o frente a la capacidad del medio ambiente para regenerarse. El segundo aspecto en el que se manifiesta la parcialidad emerge porque en caso de conflicto el Estado neoliberal favorece de manera invariable la integridad del sistema financiero y la solvencia de las instituciones financieras sobre el bienestar de la población o la calidad medioambiental.

Estos sesgos sistemáticos no siempre resultan fáciles de distinguir dentro del revoltijo de prácticas estatales divergentes y a menudo sumamente dispares. Las consideraciones pragmáticas y oportunistas juegan un importante papel. El presidente Bush defiende los mercados libres y el libre comercio, pero impuso aranceles al acero para alentar sus oportunidades electorales (de manera satisfactoria, tal y como se demostró) en Ohio. Las importaciones extranjeras se ven arbitrariamente limitadas mediante cuotas establecidas con la finalidad de aplacar el descontento doméstico. Los europeos protegen la agricultura por razones sociales, políticas e incluso estéticas, aunque insisten en el libre mercado en todos los demás sectores. Se producen intervenciones estatales especiales que favorecen intereses comerciales particulares (por ejemplo, la firma de acuerdos sobre armamento) y los Estados extienden créditos de manera arbitraria a otros Estados en aras a obtener acceso e influencia política en regiones sensibles desde el punto de vista geopolítico (como en Oriente Próximo). Por todo este tipo de razones, sería en efecto sorprendente constatar que incluso el más fundamentalista de los Estados neoliberales, no se separa nunca de la ortodoxia neoliberal.

En otros casos, estas divergencias entre la teoría y la práctica pueden ser razonablemente atribuidas a problemas friccionales de transición, que son reflejo de las diferentes formas estatales existentes con anterioridad al giro neoliberal. Las condiciones que prevalecieron en Europa central y del Este tras la caída del comunismo fueron muy especiales, por ejemplo. La velocidad con la que se produjo la privatización bajo la «terapia de choque^[89]», infligida sobre estos países en la década de 1990, creó enormes tensiones que reverberan hasta el día de hoy. Los Estados socialdemócratas (como los de Escandinavia y Gran Bretaña en el periodo inmediatamente posterior a la guerra) han mantenido durante largo tiempo sectores clave de la economía como la atención sanitaria, la educación e incluso la vivienda, fuera del mercado aduciendo que la cobertura de las necesidades humanas básicas no debía mediarse a través de las fuerzas del mercado y de un acceso limitado a las mismas en función de la capacidad de pago. Aunque Margaret Thatcher se las arregló para transformar todo este sistema, los suecos resistieron durante mucho tiempo, incluso ante enérgicas tentativas por parte de los intereses de la clase capitalista para tomar el camino neoliberal. Por razones muy diferentes, los Estados de los países en vías de desarrollo (tales como Singapur y otros países asiáticos) se apoyan en el

sector público y en la planificación estatal en estrecha colaboración con el capital doméstico y corporativo (a menudo extranjero y multinacional) para impulsar la acumulación de capital y el crecimiento económico^[90]. Los Estados de estos países suelen prestar una considerable atención a las infraestructuras sociales así como también a las físicas. Esto implica políticas mucho más igualitarias, por ejemplo, respecto al acceso a la educación y a la atención sanitaria.

La inversión estatal en educación se considera, por ejemplo, como un prerrequisito crucial para ganar ventajas competitivas en el comercio mundial. Los Estados de los países en vías de desarrollo se han tornado consecuentes con la neoliberalización hasta el punto de que facilitan la competencia entre diversas compañías, corporaciones y entidades territoriales, aceptan las reglas del libre comercio y se basan en mercados de exportación abiertos. Sin embargo, practican un intervencionismo activo creando infraestructuras que generan un clima óptimo para los negocios. Por lo tanto, la neoliberalización abre posibilidades para que los Estados de los países en vías de desarrollo fortalezcan su posición en la competencia internacional mediante el desarrollo de nuevas estructuras de intervención estatal (tales como el apoyo a la investigación y el desarrollo). Sin embargo, por la misma razón la neoliberalización crea igualmente condiciones propicias para la formación de clase y, a medida que este poder de clase se fortalece, aflora la tendencia (como ocurre, por ejemplo, en la Corea contemporánea) a que esta clase pretenda liberarse de su dependencia del poder estatal y busque reorientar este mismo poder en la dirección de las líneas marcadas por el neoliberalismo.

A medida que nuevos acuerdos institucionales vienen a definir las reglas del comercio mundial —por ejemplo, la apertura de los mercados de capital es actualmente una condición para la pertenencia al FMI o a al OMC—, los Estados de los países en vías desarrollo se ven más arrastrados al redil neoliberal. Por ejemplo, uno de los efectos principales de la crisis asiática de 1997-1998, fue llevar a los países en vías desarrollo a acatar pautas más acordes al modelo de prácticas neoliberales. Y, tal y como hemos visto en el caso británico, es difícil mantener una postura neoliberal externamente (por ejemplo, facilitar las operaciones del capital financiero) sin aceptar un mínimo de neoliberalización interna (Corea del Sur ha luchado exactamente contra este tipo de presión en tiempos recientes). Pero los Estados de los países en vías de desarrollo no están en absoluto convencidos de que la senda neoliberal sea la correcta, en particular, a raíz de que aquéllos (como Taiwán y China) que no habían liberado sus mercados de capital padecieron en mucha menor intensidad el azote de la crisis de 1997-1998 que aquellos que lo habían hecho^[91].

Las prácticas contemporáneas relativas al capital financiero y a las instituciones financieras constituyen, tal vez, el aspecto más difícil de conciliar con la ortodoxia neoliberal. Los Estados neoliberales acostumbran a facilitar la propagación de la influencia de las instituciones financieras a través de la desregulación pero, asimismo, con demasiada frecuencia también garantizan la integridad y la solvencia de las

instituciones financieras sin importar en absoluto las consecuencias. Este compromiso se deriva, en parte, (y de manera legítima en algunas versiones de la teoría neoliberal) de la dependencia del monetarismo como base de la política estatal, ya que la integridad y la solidez de la moneda es un piñón central de esta política. Pero, de manera paradójica, esto significa que el Estado neoliberal no puede tolerar que se produzcan errores financieros masivos aunque hayan sido las instituciones financieras las que hayan tomando una decisión equivocada. El Estado tiene que intervenir y sustituir el dinero «malo» por su propio dinero supuestamente «bueno»; lo que explica la presión sobre los bancos centrales para mantener la confianza en la solidez de la moneda. A menudo, el poder estatal ha sido utilizado para rescatar a compañías o para prevenir quiebras financieras, como ocurrió en la crisis de las cajas de ahorro estadounidenses de 1987-1988, que tuvo un coste aproximado para los contribuyentes de 150 000 millones de dólares, o la caída del *hedge fund* [fondo de inversión de alto riesgo] Long Term Capital Management en 1997-1998, que costó 3500 millones de dólares.

En el plano internacional, el núcleo de los Estados neoliberales dio al FMI y al Banco Mundial, plena autoridad en 1982 para renegociar la deuda de los países en vías de desarrollo, lo que de hecho suponía proteger a las principales instituciones financieras del mundo de la amenaza de quiebra. En efecto, el FMI cubre, lo mejor que puede, la exposición al riesgo y la incertidumbre de los mercados financieros internacionales. Esta práctica es difícil de justificar a tenor de las premisas de la teoría neoliberal, ya que los inversores deberían, en principio, asumir la responsabilidad de sus propios errores. Por lo tanto, los defensores más fundamentalistas del neoliberalismo creen que el FMI debería ser abolido. Esta opción fue seriamente considerada durante los primeros años de la Administración de Reagan, y los congresistas republicanos la plantearon de nuevo en 1998. James Baker, secretario del Departamento del Tesoro durante el mandato de Reagan, infundió nueva vida a la institución cuando en 1982 tuvo que enfrentarse a la potencial quiebra de México y a las graves pérdidas que sufrirían entonces los principales bancos de inversión de la ciudad de Nueva York que sostenían la deuda de aquel país. Baker utilizó el FMI para imponer un ajuste estructural en México y proteger a los banqueros de Nueva York del impago. Esta práctica consistente en priorizar las necesidades de los bancos y de las instituciones financieras mientras se cercena el nivel de vida del país acreedor ya había sido ensayada durante la crisis de endeudamiento de la ciudad de Nueva York. En el contexto internacional, esto suponía extraer excedentes de las empobrecidas poblaciones del Tercer Mundo, con el fin de saldar las deudas con la banca internacional. «Qué mundo tan peculiar», observó burlescamente Stiglitz, «en el que los países pobres se encuentran, de hecho, subvencionando a los más ricos». Hasta Chile —el ejemplo de las prácticas neoliberales «puras» desde 1975— se vio arrollado por esta corriente en 1982-1983, con el resultado de que su PIB cayó casi en un 14% y la tasa del desempleo se disparó

hasta alcanzar el 20% en un solo año. La conclusión de que la neoliberalización «pura» no funciona, no ha sido documentada en el plano teórico, aunque la posterior adaptación pragmática de Chile (así como en Gran Bretaña después de 1983) abrió un terreno de concesiones que amplió todavía más la laguna existente entre la teoría y la práctica^[92].

La extracción de tributo mediante mecanismos financieros es una vieja práctica imperial. Se ha demostrado muy útil para la restauración del poder de clase, particularmente en los principales centros financieros del mundo y no siempre precisa de crisis de ajuste estructural para funcionar. Por ejemplo, cuando los empresarios de los países en vías de desarrollo solicitan préstamos en el exterior, la exigencia de que su propio Estado debe tener una reserva suficiente de divisas extranjeras para cubrir sus créditos se traduce en que el Estado tenga que invertir, pongamos por caso, en bonos del Tesoro estadounidense. La diferencia entre el tipo de interés que se aplica al dinero prestado (por ejemplo, el 12%) y al dinero depositado como fianza en las arcas estadounidenses en Washington (por ejemplo, el 4%) genera un importante flujo financiero neto al centro imperial a expensas del país en vías de desarrollo.

Esta tendencia demostrada por algunos de los Estados situados en el centro de la economía-mundo capitalista (como Estados Unidos) a proteger los intereses financieros y a cruzarse de brazos mientras se succionan los excedentes de otros lugares, promueve y refleja, simultáneamente, la consolidación del poder de la clase alta en el seno de esos Estados en torno a los procesos de financiarización. Pero el hábito de intervenir en el mercado y de rescatar a las instituciones financieras cuando les acucian los problemas no puede conciliarse con la teoría neoliberal. La inversión imprudente debería castigarse con la pérdida de dinero por parte de los prestamistas, pero el Estado hace a éstos en gran medida inmunes frente a las pérdidas. La teoría neoliberal debería advertir «prestamista, ten cuidado», pero la práctica dicta «prestatarario, ten cuidado».

Existen límites a la capacidad de succionar excedentes de las economías de los países en vías de desarrollo. Encorsetadas por las medidas de austeridad que las atan a un estancamiento económico crónico, la perspectiva de saldar sus deudas con frecuencia se ha disipado en un incierto futuro lejano. Ante estas condiciones, algunas pérdidas dosificadas pueden parecer una opción atractiva. Así ocurrió con el Plan Brady de 1989^[93]. Las instituciones financieras estuvieron de acuerdo en anotar el 35% de su deuda pendiente en la columna de las pérdidas, a cambio de la obtención de bonos por debajo de su precio ordinario (respaldadas por el FMI y por el Departamento del Tesoro estadounidense) que garantizaban la devolución del resto de la deuda (en otras palabras, se garantizaba a los acreedores el pago de la deuda a una tasa de 65 céntimos por dólar). En 1994, cerca de 18 países (incluidos México, Brasil, Argentina, Venezuela, y Uruguay) habían aceptado acuerdos en virtud de los cuales les eran condonados 60 000 millones de dólares de deuda. Por supuesto, la esperanza era que esta condonación de la deuda desencadenara una recuperación económica que

permitiera que el resto de la deuda se saldara de la forma debida. El problema estribaba en que el FMI también se aseguró de que todos los países que se aprovecharon de esta módica condonación de su deuda (que muchos analistas consideraron mínima en relación a la que los bancos podían permitirse) también asumían la obligación de tragarse la píldora envenenada de las reformas institucionales neoliberales. La crisis del peso en México en 1995, la de Brasil en 1998, y el absoluto desplome de la economía argentina en 2001 eran resultados previsibles.

Finalmente, esto nos lleva a la problemática cuestión del modo en que el Estado neoliberal enfoca los mercados laborales. En el plano interno, el Estado neoliberal es necesariamente hostil a toda forma de solidaridad social que entorpezca la acumulación de capital. Por lo tanto, los sindicatos independientes u otros movimientos sociales (como el socialismo municipal del tipo experimentado en el Consejo del Gran Londres), que adquirieron un considerable poder bajo el liberalismo embridado, tienen que ser disciplinados, cuando no destruidos, en nombre de la supuestamente sacrosanta libertad individual del trabajador aislado. La «flexibilidad» se ha convertido en una consigna en lo que se refiere a los mercados laborales. Es difícil sostener que el aumento de la flexibilidad es algo negativo en términos absolutos, en particular ante prácticas sindicales esclerotizadas y sumamente restrictivas. Así pues, hay reformistas con convicciones de izquierdas que afirman de manera contundente que la «especialización flexible» es un avance^[94]. Aunque algunos trabajadores individuales puedan, sin duda, beneficiarse de esto, las asimetrías de poder y de información que emergen, unidas a la falta de una movilidad libre y factible de la fuerza de trabajo (particularmente a través de las fronteras estatales) colocan a los trabajadores en una situación de desventaja. La especialización flexible puede ser aprovechada por el capital como un sencillo método de obtener medios de acumulación más flexibles. Ambos términos — especialización flexible y acumulación flexible— tienen connotaciones bastante diferentes^[95]. El resultado general se traduce en la disminución de los salarios, el aumento de la inseguridad laboral y, en muchas instancias, la pérdida de los beneficios y de las formas de protección laboral previamente existentes. Estas tendencias son fácilmente discernibles en todos los Estados que han emprendido la senda neoliberal. Dado el violento ataque ejercido contra todas las formas de organización obrera y contra los derechos laborales, y la gran dependencia de las masivas pero sumamente desorganizadas reservas de trabajadores que podemos encontrar en países como China, Indonesia, India, México y Bangladesh, se podría decir que el control de la fuerza de trabajo así como el mantenimiento de una elevada tasa de explotación laboral, han sido un elemento central y una constante, de la neoliberalización. La restauración o la formación del poder de clase se producen, como siempre, a expensas de la fuerza de trabajo.

Es precisamente en este contexto, caracterizado por la disminución de los

recursos personales derivados del mercado de trabajo, en el que la determinación neoliberal de transferir nuevamente al individuo toda la responsabilidad por su bienestar adquiere un carácter doblemente perjudicial. El Estado, a la vez que abandona el sistema de provisión social y reduce su papel en ámbitos como la asistencia sanitaria, la educación pública y los servicios sociales, que antes fueron tan esenciales para el liberalismo embridado, también deja segmentos cada vez mayores de población expuestos al empobrecimiento^[96]. El sistema de la seguridad social se ve reducido a su mínima expresión para ceder el paso a un sistema que hace hincapié en la responsabilidad personal. La incapacidad personal se atribuye por regla general a fracasos personales y, en la mayoría de los casos, se culpabiliza a las víctimas de su situación.

Detrás de estos importantes cambios en la política social, descansan relevantes transformaciones estructurales en la naturaleza del gobierno. Al tenor de la desconfianza neoliberal hacia la democracia, se hace necesario encontrar una forma de integrar el proceso estatal de toma de decisiones en la dinámica de acumulación de capital y en las redes de poder de clase que se hallan en proceso de restauración o, como en China y Rusia, en proceso de formación. La neoliberalización ha implicado, por ejemplo, una creciente dependencia de consorcios público-privados (ésta fue una de las ideas fuertes impulsadas por Margaret Thatcher cuando estableció «instituciones cuasigubernamentales» como las corporaciones de desarrollo urbano para favorecer el desarrollo económico). Los empresarios y las corporaciones no sólo colaboran estrechamente con actores estatales, sino que incluso adquieren un importante papel a la hora de redactar legislaciones, determinar políticas públicas, y establecer marcos normativos (que son ventajosos principalmente para ellos mismos). Emergen, de este modo, patrones de negociación que introducen intereses empresariales y en algunos casos profesionales en el ejercicio del gobierno a través de consultas privadas y en ocasiones secretas. El ejemplo más flagrante de este tipo de intervenciones se hizo patente con la persistente negativa del vicepresidente Cheney a hacer públicos los nombres de las personas integrantes del equipo consultivo que formuló el documento de la política energética de la Administración de Bush de 2002. Es prácticamente seguro que entre ellos se encontraba Kenneth Lay, presidente de Enron, que es la compañía acusada de especular promoviendo deliberadamente una crisis energética en California y que se hundió seguidamente en medio de un gran escándalo por alterar su contabilidad. Por lo tanto, el cambio del gobierno (el poder estatal por sí mismo) a la gobernanza (una configuración más amplia del Estado y de elementos clave de la sociedad civil) ha venido marcado por el neoliberalismo^[97]. A este respecto, en líneas generales, puede decirse que las prácticas del Estado neoliberal y del Estado de los países en desarrollo convergen.

El Estado produce de manera característica legislación y marcos normativos que suponen una ventaja para las corporaciones y en ciertos casos para intereses específicos como la energía, las empresas farmacéuticas, la industria agropecuaria,

etc. En muchos de los casos en que existen consorcios público-privados, particularmente en el ámbito municipal, el Estado asume gran parte de los riesgos mientras que el sector privado obtiene la mayor parte de los beneficios. Además, en caso de ser necesario, el Estado neoliberal recurrirá a la imposición coercitiva de la legislación y a tácticas de control (normas que prohíben los piquetes, por ejemplo) para dispersar o para reprimir las formas colectivas de oposición al poder corporativo. Los medios de vigilancia y de control se multiplican. Por ejemplo, en Estados Unidos la encarcelación se convirtió en una estrategia crucial del Estado para abordar los problemas que surgían entre los sectores de trabajadores excluidos del mercado de trabajo así como entre otros grupos marginados de la población. El brazo coercitivo del Estado se estira para proteger los intereses corporativos y, en su caso, reprimir a los disidentes. Ninguna de estos resultados parece coherente con la teoría neoliberal. El mejor sitio para constatar la realización del miedo neoliberal a que los grupos que representan intereses especiales puedan pervertir y subvertir el Estado no es otro que Washington, donde ejércitos de empleados al servicio de los grupos de presión corporativos (muchos de los cuales se aprovechan de la puerta giratoria entre el empleo estatal y el mucho más lucrativo empleo en las corporaciones) dictan efectivamente la legislación para que encaje con sus intereses específicos. Aunque algunos Estados continúan respetando la independencia tradicional de los funcionarios de la Administración, en todas partes esta situación se está viendo amenazada a causa del proceso de neoliberalización que está en marcha. La frontera entre el Estado y el poder corporativo se ha tornado cada vez más porosa. Lo que queda de la democracia representativa se encuentra si no totalmente asfixiado, sí al menos legalmente corrompido por el poder del dinero.

Desde el momento en que el acceso al sistema judicial es nominalmente igualitario pero en la práctica extremadamente caro (ya se trate de una demanda individual por prácticas negligentes o de una demanda formulada por un país contra Estados Unidos por la violación de las reglas establecidas por la OMC, que es un procedimiento que puede llegar a costar miles de millones de dólares, es decir, una suma equivalente al presupuesto anual de algunos pequeños países pobres), los resultados a menudo distan de ser imparciales y favorecen a los que ostentan el poder económico. Los privilegios de clase en la toma de decisiones dentro del poder judicial, se encuentran muy extendidos, cuando no invaden todo el proceso^[98]. No debería sorprender que los principales medios de acción colectiva bajo el neoliberalismo se definan y se articulen a través de grupos no electos (y en muchos casos dirigidos por la elite) de defensa de varios tipos de derechos. En algunos casos, como en el campo de la protección de los consumidores, de los derechos civiles o de los derechos de las personas discapacitadas, esos medios han permitido alcanzar objetivos sustantivos. Las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de base popular también han crecido y proliferado de manera destacada bajo el neoliberalismo, dando lugar a la creencia de que la oposición movilizada fuera del

aparato estatal y dentro de cierta entidad separada denominada «sociedad civil» es la fuente de energía de la política opositora y de la transformación social^[99]. El periodo en el que el Estado neoliberal se ha tornado hegemónico ha sido también el período en el que el concepto de sociedad civil —a menudo calificada como una entidad opuesta al poder estatal— se ha convertido en un elemento central para la formulación de políticas opositoras. La idea gramsciana del Estado como una unidad de la sociedad política y la sociedad civil deja paso a la idea de la sociedad civil como un centro de oposición, sino como fuente de una alternativa, al Estado.

La conclusión clara que podemos deducir de este análisis, es que el neoliberalismo no torna irrelevante al Estado ni a instituciones particulares del Estado (como los tribunales y las funciones policiales), tal y como algunos analistas tanto de derechas como de izquierdas han argumentado^[100]. Sino que más bien, y con el objeto de hacerlo más funcional a sus propios intereses, producen una reconfiguración radical de las instituciones y de las prácticas estatales (en particular respecto al equilibrio entre la coerción y el consentimiento, entre el poder del capital y de los movimientos populares, y entre el poder ejecutivo y judicial, por un lado, y los poderes de la democracia representativa por otro).

Pero no todo marcha bien para el Estado neoliberal y por ello, en tanto que forma política, parece mostrar un carácter o bien transitorio o bien inestable. El problema radica en la creciente disparidad entre los objetivos públicos declarados del neoliberalismo —el bienestar de todos— y sus consecuencias reales: la restauración del poder de clase. Pero más allá de este hecho, reside toda una serie de contradicciones más específicas que necesitan ser subrayadas.

1. Por un lado, se espera que el Estado neoliberal ocupe el asiento trasero y simplemente disponga el escenario para que el mercado funcione, por otro, se asume que adoptará una actitud activa para crear un clima óptimo para los negocios y que actuará como una entidad competitiva en la política global. En este último papel tiene que funcionar como una entidad corporativa, y esto plantea el problema de cómo asegurar la lealtad de los ciudadanos. Una respuesta evidente es el nacionalismo, pero éste es profundamente antagónico respecto a la agenda neoliberal. Éste era el dilema de Margaret Thatcher, ya que el único modo que tenía de ganar la reelección y de promover con mayor intensidad las reformas neoliberales en el ámbito doméstico, era jugando la carta del nacionalismo en la guerra de Falklands/Malvinas o, incluso de manera más significativa, en la campaña contra la integración económica en Europa. Una y otra vez, ya sea en la Unión Europea o en MERCOSUR (donde los nacionalismos brasileños y argentinos impiden la integración), en el TLCAN^[101] o en la ASEAN, el nacionalismo requerido para que el Estado funcione efectivamente como una entidad corporativa y competitiva en el mercado mundial entorpece el camino de las libertades comerciales más generales.

2. El autoritarismo en la imposición del mercado a duras penas encaja con el ideario de las libertades individuales. Cuanto más vira el neoliberalismo hacia lo primero, más difícil se vuelve mantener su legitimidad respecto a lo segundo y más tiene que revelar sus colores antidemocráticos. Esta contradicción es paralela a una creciente falta de simetría en las relaciones de poder entre las corporaciones y las personas de a pie. Si el «poder corporativo roba tu libertad personal», entonces la promesa del neoliberalismo se queda en nada^[102]. Esto afecta a los individuos tanto en su lugar de trabajo como en su espacio vital. Por ejemplo, se puede afirmar que la situación de una persona con respecto a los sistemas de cobertura sanitaria es cuestión de responsabilidad y de opciones personales, pero esta afirmación deja de ser sostenible cuando la única forma que se tiene de cubrir las necesidades en el mercado es mediante el pago de primas exorbitantes a compañías de seguros ineficientes, gigantescas y sumamente burocratizadas, pero también altamente rentables. Cuando estas compañías tienen incluso el poder de definir nuevas categorías de enfermedades para hacerlas coincidir con la aparición en el mercado de nuevos medicamentos, hay algo que claramente no está funcionando como debiera^[103]. Tal y como vimos en el Capítulo 2, mantener la legitimidad y el consentimiento en estas circunstancias se convierte en un juego de equilibrios mucho más complicado, que puede venirse abajo fácilmente cuando las cosas empiezan a ir mal.

3. Aunque preservar la integridad del sistema financiero puede ser crucial, el individualismo autoglorificador e irresponsable de sus operadores son fuente de volatilidad especulativa, de escándalos financieros y de inestabilidad crónica. Los escándalos de Wall Street y los fraudes contables destapados en los últimos años han socavado la confianza y planteado serios problemas a las autoridades reguladoras acerca de cómo y cuándo intervenir, tanto en el plano internacional como nacional. La libertad de comercio a escala internacional, requiere la existencia de ciertas reglas de juego, y esto suscita la necesidad de cierto tipo de gobernanza global (por ejemplo, a través de la OMC). La desregulación del sistema financiero abre la puerta a conductas que exigen una regulación en aras a evitarse la crisis^[104].

4. Si bien se colocan en un primer plano las virtudes de la competencia, la realidad delata la creciente consolidación del poder transnacional, monopolista y oligopolista dentro de un reducido número de centralizadas corporaciones multinacionales. Por ejemplo, la competencia en el mundo de las bebidas refrescantes se reduce a Coca-Cola versus Pepsi, en la industria energética se limita a cinco grandes corporaciones transnacionales y apenas unos cuantos magnates de los medios de comunicación controlan la mayor parte del flujo de noticias, que en muchos casos se convierten en pura propaganda.

5. En el plano popular, la expansión de las libertades de mercado y de la mercantilización de todo lo existente, puede escaparse al control muy fácilmente y generar una sustancial falta de cohesión social. La destrucción de todos los vínculos de solidaridad social e, incluso, como sugirió Thatcher, de la propia idea de sociedad

como tal, abre un enorme vacío en el orden social. Se vuelve entonces especialmente difícil combatir la anomia y controlar las conductas antisociales concomitantes que surgen, como la criminalidad, la pornografía o la práctica de la esclavización de otras personas. La reducción de la «libertad» a la «libertad de empresa» desata todas aquellas «libertades negativas» que Polanyi vio como inextricablemente ligadas a las libertades positivas. La respuesta inevitable consiste en reconstruir los vínculos de solidaridad social, si bien en virtud de líneas diferentes. Esto explica el renovado interés por la religión y la moralidad, por nuevas formas de asociacionismo (en torno a cuestiones de derechos y de ciudadanía, por ejemplo) o, igualmente, la reedición de formas políticas más viejas (el fascismo, el nacionalismo o el localismo, entre otras). El neoliberalismo, en su versión pura, siempre ha amenazado con provocar el nacimiento de su propia némesis^[105] en una variedad de populismos y nacionalismos autoritarios. Tal y como Schwab y Smadja, organizadores del congreso anual —en otros tiempos, puramente conmemorativo— de Davos, nos advertían ya en 1996:

La globalización económica ha entrado en una nueva fase. Una creciente reacción contra sus consecuencias, especialmente en las democracias de los países industrializados, amenaza con tener un impacto desestabilizador en muchos países sobre la actividad económica así como sobre la estabilidad social. El clima general en estas democracias es de indefensión y de ansiedad, lo que ayuda a explicar el auge de una nueva corriente de políticos populistas. No es difícil que esto se transforme en una insurrección^[106].

La respuesta neoconservadora

Si el Estado neoliberal es esencialmente inestable, entonces, ¿qué podría sustituirle? En Estados Unidos hay señales de una respuesta propiamente neoconservadora a este interrogante. En sus reflexiones sobre la historia reciente de China, Wang también sugiere que en un plano teórico:

Todas estas narrativas discursivas, como «neautoritarismo», «neoconservadurismo», «liberalismo clásico», «extremismo mercantil», «modernización nacional», etc., guardan algún tipo de estrecha relación con la constitución del neoliberalismo. El desplazamiento sucesivo entre unos términos y otros (o, incluso, las contradicciones existentes entre ellos) muestran los cambios en la estructura del poder tanto en la China contemporánea como en el mundo contemporáneo en su conjunto^[107].

El hecho de si esto vaticina o no una reconfiguración más general de las estructuras de gobierno a lo largo del planeta, no podemos saberlo por ahora. Sin embargo, resulta interesante observar de qué modo la neoliberalización llevada a cabo en Estados autoritarios como China y Singapur, parece coincidir con el creciente autoritarismo patente en Estados neoliberales como Estados Unidos y Gran Bretaña. Veamos, pues, de qué modo la respuesta conservadora a la inestabilidad esencial del Estado neoliberal ha evolucionado en Estados Unidos.

Al igual que los liberales que les precedieron, los «neocons^[108]» han alimentado durante largo tiempo sus particulares lecturas del orden social en las universidades (siendo particularmente influyente Leo Strauss en la Universidad de

Chicago) y en *think-tanks* generosamente financiados, así como también a través de influyentes publicaciones (como *Commentary*)^[109]. Los neoconservadores alientan el poder corporativo, la empresa privada y la restauración del poder de clase. Por lo tanto, el neoconservadurismo concuerda totalmente con la agenda neoliberal del gobierno elitista, la desconfianza hacia la democracia y el mantenimiento de las libertades de mercado. No obstante, se aleja de los principios del neoliberalismo puro y ha reformulado las prácticas neoliberales en dos aspectos fundamentales: primero, en su preocupación por el orden como una respuesta al caos de los intereses individuales y, segundo, en su preocupación por una moralidad arrogante como el aglutinante social que resulta necesario para mantener seguro al Estado frente a peligros externos e internos.

En su preocupación por el orden, el neoconservadurismo emerge como una sencilla manera de despojarse del velo de antiautoritarismo en el que pretendía envolverse el neoliberalismo. Pero también propone respuestas propias a una de las contradicciones centrales del neoliberalismo. Si «no existe eso que llamamos sociedad, sino únicamente individuos», tal y como Thatcher lo formulara en un principio, entonces, el caos de los intereses individuales puede con facilidad acabar prevaleciendo sobre el orden. La anarquía del mercado, de la competitividad y del individualismo desenfrenado (esperanzas, deseos, ansiedades y miedos individuales; opciones sobre los estilos de vida, sobre los hábitos y orientaciones sexuales; modos de expresión y de comportamiento hacia los otros) genera una situación que se torna progresivamente ingobernable. Incluso, puede conducir a una ruptura de todos los vínculos de solidaridad y a un estado próximo al anarquismo social y el nihilismo.

Frente a esta situación, parece necesario implantar cierto grado de coerción social en aras a restaurar el orden. Por lo tanto, los neoconservadores hacen hincapié en la militarización en tanto que antídoto al caos de los intereses individuales. Por esta razón son mucho más propensos a llamar la atención sobre las amenazas, ya sean reales o imaginarias, y tanto domésticas como provenientes del exterior, a la integridad y a la estabilidad de la nación. En Estados Unidos, esto implica accionar lo que Hofstadter describe como «el estilo paranoico de la política estadounidense», en el que la nación se representa sitiada y amenazada por enemigos internos y externos^[110]. Este estilo de hacer política tiene una dilatada historia en Estados Unidos. El neoconservadurismo no es nuevo, y desde la Segunda Guerra Mundial ha encontrado su hogar particular en el poderoso complejo de la industria militar, que tiene intereses creados en la militarización permanente. Pero el final de la Guerra Fría planteó el interrogante sobre de dónde provendría la amenaza a la seguridad estadounidense. El islamismo radical y China emergieron como los candidatos más probables en el frente externo, y los movimientos de disidencia surgidos en su seno (los miembros de Rama Davidiana masacrados en Waco, el movimiento de milicias que brindó socorro al atentado de Oklahoma, los disturbios que estallaron en Los Ángeles tras la paliza a Rodney King y, finalmente, los disturbios de Seattle en 1999)

tenían que ser colocados en el punto de mira interno mediante un fortalecimiento de la vigilancia y del seguimiento policial de los mismos. La emergencia sumamente real de la amenaza del islamismo radical durante la década de 1990, que culminó en los acontecimientos del 11 de septiembre, saltó finalmente al primer plano como el elemento central de la declaración de una «guerra contra el terrorismo» permanente que exigía una militarización tanto interna como en el plano internacional para garantizar la seguridad de la nación. Aunque a todas luces era preciso articular algún tipo de respuesta militar/policial a la amenaza evidenciada por los dos ataques contra el World Trade Center de Nueva York, la llegada al poder de los neoconservadores garantizaba una respuesta global y, en opinión de muchos, extralimitada en el paso hacia una vasta militarización tanto en casa como en el extranjero^[111].

Desde hace largo tiempo, el neoconservadurismo ha estado planeando como un movimiento contra la permisividad moral que promueve de manera característica el individualismo. En este sentido, pretende restaurar un sentido de finalidad moral, esto es, ciertos valores de orden superior que formarán el centro estable del cuerpo político. Esta posibilidad en cierto modo se presagia en el marco de las teorías neoliberales que «al poner en tela de juicio la propia fundación política de los modelos intervencionistas de gestión económica [...] han vuelto a introducir cuestiones relativas a la moralidad, la justicia y el poder, aunque a su propia y particular manera»^[112]. En efecto, los neoconservadores transforman las «modalidades particulares» en las que estas cuestiones se introducen en el debate. Su objetivo es contrarrestar el efecto desintegrador del caos de los intereses individuales, que el neoliberalismo produce de manera invariable. En absoluto se apartan de la agenda neoliberal en cuanto a la construcción o a la restauración de un poder de la clase dominante. En efecto, aspiran a ganar legitimidad para ese poder, así como también un mayor grado de control social a través de la creación de un clima de consentimiento alrededor de un conjunto coherente de valores morales. Esto plantea de manera inmediata la cuestión de cuáles son los valores morales que deberían prevalecer. Sería perfectamente viable, por ejemplo, apelar al sistema liberal de los derechos humanos ya que, en definitiva, el objetivo del activismo en favor de los derechos humanos, en palabras de Mary Kaldor, «no descansa meramente en la intervención para proteger los derechos humanos, sino en la creación de una comunidad moral»^[113]. En Estados Unidos, las doctrinas que promueven la «excepcionalidad» y la larga historia del activismo por los derechos civiles han generado, sin lugar a dudas, movimientos de carácter moral alrededor de cuestiones como los derechos civiles, el hambre en el mundo y el compromiso filantrópico, así como también un fervor misionero.

Pero el mejor modo de comprender los valores morales que actualmente ocupan el papel más importante para los neoconservadores es atendiendo al hecho de que son el producto de la particular coalición forjada en la década de 1970 entre la elite y los intereses financieros unidos con la intención principal de restaurar su poder de clase,

por un lado, y una base electoral integrada en la «mayoría moral» de la desengañada clase obrera blanca, por otro. Los valores morales se concentraron en el nacionalismo cultural, la superioridad moral, el cristianismo (de un determinado tipo evangélico), los valores familiares en relación con cuestiones como el derecho a la vida y en el antagonismo respecto a los nuevos movimientos sociales, como el feminismo, los derechos de los homosexuales, la acción afirmativa o el ecologismo. Si bien durante la era reaganiana esta alianza fue eminentemente táctica, el desorden doméstico de los años de Clinton convirtió el debate sobre los valores morales en el eje del republicanismo de Bush hijo. Actualmente, constituye el centro de gravedad de la agenda moral del movimiento neoconservador^[114].

Pero no sería acertado considerar este giro neoconservador como un rasgo excepcional o particular de Estados Unidos, aunque puedan estar funcionando en este país elementos específicos que no están presentes en otros lugares, aquí esta afirmación de los valores morales se apoya de manera considerable en apelaciones a los ideales ligados, entre otras cosas, a la nación, a la religión, a la historia o a la tradición cultural, y en ningún caso estos ideales se ciñen a este país. Este hecho coloca nuevamente en el centro del análisis, y de manera más acusada, uno de los aspectos más problemáticos de la neoliberalización, esto es, la curiosa relación entre el Estado y la nación. En principio, la teoría neoliberal no mira con buenos ojos a la *nación*, aún cuando defiende la idea de un Estado fuerte. El cordón umbilical que une al Estado y a la nación bajo el liberalismo embridado, ha de ser cortado si se quiere que el neoliberalismo pueda madurar. Esta afirmación se torna especialmente cierta si pensamos en algunos Estados, como México y Francia, que adoptan una forma corporativista. El Partido Revolucionario Institucional de México había defendido durante un largo periodo de tiempo el lema de la unidad entre el Estado y la nación, pero esta defensa hizo aguas de manera progresiva, e hizo, incluso, que buena parte de la nación se volviese contra el Estado a raíz de las reformas neoliberales adoptadas durante la década de 1990. Por supuesto, el nacionalismo ha sido un rasgo secular de la economía global y efectivamente sería extraño que hubiera desaparecido sin dejar rastro como resultado de las reformas neoliberales; de hecho, en cierta medida ha revivido como oposición a las consecuencias que ha acarreado el proceso de neoliberalización. El ascenso de los partidos de derecha de corte fascista en Europa, que expresan fuertes sentimientos en contra de la población inmigrante, es un claro ejemplo de ello. Más lamentable fue, si cabe, el nacionalismo étnico que estalló al calor del desplome económico de Indonesia y que concluyó con un brutal ataque contra la minoría china en aquél país.

Sin embargo, tal y como hemos visto, el Estado neoliberal necesita cierta forma de nacionalismo para sobrevivir. Empujado a operar como un agente competitivo en el mercado mundial y pretendiendo establecer el mejor clima posible para los negocios, el Estado neoliberal moviliza el nacionalismo en sus esfuerzos por alcanzar el éxito. La competitividad produce ganadores y perdedores efímeros en la lucha

global por alcanzar una determinada posición y este hecho, en sí mismo, puede ser una fuente de orgullo, o de examen de conciencia, nacional. Igualmente, esto se pone de manifiesto en el nacionalismo que se genera alrededor de las competiciones deportivas que se celebran entre diferentes países. En China, hay una abierta apelación al sentimiento nacionalista en la lucha por obtener una posición (cuando no la hegemonía) en la economía global (al igual que podemos ver en la intensidad de su programa de entrenamiento para los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de Pekín). Tanto Corea del Sur como Japón se encuentran asimismo desbordados por un sentimiento nacionalista y, en ambos casos, este hecho puede ser considerado como un antídoto frente a la disolución de los antiguos vínculos de solidaridad social bajo el impacto del neoliberalismo. En el seno de los viejos Estados-nación (como Francia) que ahora constituyen la Unión Europea, se están avivando fuertes corrientes de nacionalismo cultural. La religión y el nacionalismo cultural también brindaron el aliento moral que durante los últimos años sostuvo el éxito del Partido Nacionalista Hindú para poner en marcha las prácticas neoliberales en la India. La invocación de valores morales en la revolución iraní y el posterior giro hacia el autoritarismo, no han conllevado el abandono total de las prácticas basadas en el mercado en este país, aunque la revolución apuntaba contra la decadencia del individualismo desenfrenado de las relaciones mercantiles. Un impulso semejante descansa detrás del viejo sentido de superioridad moral que invade países como Singapur y Japón respecto a lo que ellos perciben como el individualismo decadente y el multiculturalismo deslavazado de Estados Unidos. El ejemplo de Singapur es particularmente ilustrativo. Ha combinado el neoliberalismo en el mercado con un poder estatal draconiano, coercitivo y autoritario, mientras apela a vínculos de solidaridad moral basados en los ideales nacionalistas de un Estado insular asediado (tras su expulsión de la federación malaya), en los valores confucianos y, de manera más reciente, en una versión propia de la ética cosmopolita apropiada a su actual posición en el mundo del comercio internacional^[115]. Especialmente interesante es, asimismo, el caso británico. Margaret Thatcher, a través de la guerra de las Islas Falklands/Malvinas y de su postura antagonista hacia Europa, invocó el sentimiento nacionalista para suscitar el apoyo a su proyecto neoliberal, aunque la idea que animaba su visión era la de Inglaterra y San Jorge, y no la del Reino Unido, lo que despertó la hostilidad de Escocia y de Gales.

Evidentemente, aunque el coqueteo con cierto tipo de nacionalismo presente peligros, el ardiente abrazo por parte del neoconservadurismo de una meta moral nacional es mucho más amenazante. La imagen de un nutrido grupo de Estados dispuestos a recurrir por separado a prácticas coercitivas draconianas cada uno en apoyo de sus propios valores morales diferenciadores y supuestamente superiores, compitiendo entre sí en la escena mundial, no resulta alentadora. Lo que parece una solución a las contradicciones del neoliberalismo, puede convertirse con demasiada facilidad en un problema en sí mismo. La expansión del poder neoconservador,

cuando no plenamente autoritario (de manera similar al que Vladimir Putin ejerce en Rusia y al que el Partido Comunista ejerce en China), aunque se funde de manera muy diferenciada en formaciones sociales distintas, ilumina los peligros de caer en una competencia, o incluso en una guerra, entre nacionalismos. Si el hecho de que esto ocurra es inevitable, es más probable que se deba al giro neoconservador que a verdades eternas atribuidas a diferencias supuestamente nacionales. Por lo tanto, si queremos evitar desenlaces catastróficos, es necesario rechazar la solución neoconservadora de las contradicciones del neoliberalismo. No obstante, esto hace presumir la existencia de alguna alternativa, cuestión que abordaremos más adelante.